112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en cuanto a las exigencias o no de interés de demora, que para cada uno de ellos establece el citado precepto legal.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Delegación del Gobierno.

Granada, 27 de noviembre de 1998.- El Delegado, Jesús Quero Molina.

RELACION QUE SE CITA

AYUNTAMIENTO	OBRA	CUANTIA
ALAMEDILLA	REPARACIONES Y MEJORAS EN EL AYUNTAMIENTO	700.000
CÁDIZ	ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	325.000
ESCUZAR	ADQUISICIÓN IMPRESORA	145.900
HUÉTOR VEGA	ADQUISICIÓN CENTRAL TELEFÓNICA	625.000
MONACHIL	ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	700.000
MONTEJICAR	ADQUISICIÓN MOBILIARIO AYUNTAMIENTO	700.000
PUEBLA D. FADR.	REFORMA EDIFICIO CASA CONSISTORIAL	750.000
POLICAR	REPARACIÓN CASA CONSISTORIAL	700.000
CONS.M.ORIENT.	ADQUISICIÓN MOBIL. Y EQUIPO INFORMÁTICO	354.100
T O T A L		5.000.000

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de la Delegación del Gobierno de Granada, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas al amparo de la Orden que se cita.

1. El Real Decreto Ley 2/98, de 17 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y temporales acaecidos entre noviembre de 1997 y febrero de 1998 (BOE núm. 93, de 18 de abril), en su artículo 13.1 establece la creación de una Comisión interministerial para la aplicación de las medidas establecidas en este Real Decreto Ley, formando parte de esta Comisión entre otros el Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma en la que resulte de aplicación este Real Decreto Ley.

2. La Orden de 21 de mayo de 1998, por la que se determinan los términos municipales y núcleos de población, a los que son de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto Ley 2/98, de 17 de abril, en su artículo primero, determina los municipios a los que son de aplicación tales medidas correspondiendo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la provincia de Granada, al municipio de Lanjarón.

3. Reunida la Comisión Provincial de Gobierno de Granada, se determina que por la Diputación Provincial se redacten los correspondientes estudios y proyectos, que determinarán la evaluación económica de los daños ocasionados por las inundaciones y temporales, en el período de tiempo contemplado en el Real Decreto Ley 2/98, de 17 de abril, evaluándose los mismos en cuarenta y cuatro millones de pesetas.

4. Financiación: Dado que el Real Decreto Ley 2/98, de 17 de abril, contempla en su Disposición Adicional Tercera ayudas excepcionales para viviendas y enseres, previendo en su punto tercero una financiación específica de estas ayudas. La Comisión Provincial de Gobierno acuerda aplicar el mismo sistema de financiación para el caso del municipio de Lanjarón, aun cuando los daños ocasionados por las inundaciones y tormentas fuesen en la infraestructura municipal, que afectaban a las viviendas edificadas en dicha zona acordando pues la Comisión el plan de financiación siguiente:

- Administración Central: 22.000.000.
- Comunidad Autónoma: 11.100.000.

- Diputación Provincial: 5.500.000.
- Ayuntamiento de Lanjarón: 5.400.000.

Total: 44.000.000.

La subvención de la Comunidad Autónoma se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 01 10 00 01 18 76500 81A O, denominada «Para Servicios y Obras», según notificación dirigida a esta Delegación del Gobierno por el Servicio de Gestión Económica de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación y Justicia, comunicando la disponibilidad del crédito reseñado como aportación de la Comunidad Autónoma en la antes referida financiación.

5. Las subvenciones se asignarán a la Diputación Provincial, que adquiere de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 5/1983, de 19 de julio) las obligaciones inherentes a las entidades colaboradoras.

HE RESUELTO

Primero. Conceder a la Diputación Provincial de Granada una subvención por importe de once millones cien mil pesetas, con destino al Ayuntamiento de Lanjarón (Granada).

Segundo. Las condiciones de ejecución de la actividad subvencionada serán las siguientes:

a) El plazo máximo para la contratación de las obras, o para la adopción del acuerdo de ejecución directa por la propia Administración, en su caso, es de tres meses contados a partir de la notificación de la concesión de la subvención.

b) El plazo máximo para la terminación de las obras subvencionadas es de un año desde su contratación o iniciación para el caso de ejecución directa por la propia Administración.

c) La Diputación Provincial de Granada dará cuenta a esta Delegación del Gobierno del estado de ejecución de las obras, dentro del mes siguiente al vencimiento de cada semestre natural.

Tercero. La subvención se hará efectiva a la Diputación Provincial de Granada, mediante el abono del 100% de su importe, ya que la misma lleva implícita la declaración de excepcional y justificada a la finalidad pública e interés social.

Cuarto. La justificación del importe de la subvención concedida se realizará del siguiente modo:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en la contabilidad el ingreso del importe recibido, con indicación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados en base a las certificaciones de obras ejecutadas por la propia Administración, hasta el importe abonado de la subvención.

Quinto. La Diputación de Granada tendrá las siguientes obligaciones:

- Realizar las inversiones que fundamentan la concesión de la subvención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno la aplicación de los fondos en la forma y plazos señalados en el punto anterior.

- El sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia, sin perjuicio de las que correspondan al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

- Comunicar a esta Delegación del Gobierno toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para otorgar la subvención, y en particular, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, dis-

tintos de los recogidos en la financiación acordada por la Comisión Provincial de Gobierno.

Sexto. Procederá el reintegro de la cantidad percibida en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuanto a la exigencia o no de interés de demora, que para cada uno de ellos establece el citado precepto legal.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Delegación del Gobierno.

Granada, 28 de diciembre de 1998.- El Delegado, Jesús Quero Molina.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales, por la que se emplaza a los interesados en el recurso núm. 1/388/98, Sección 7, contencioso-administrativo, Tribunal Supremo, Sala 3.^a

Ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, don Antonio Reyes Brito y otros han interpuesto recurso núm. 1/388/98 contra la Resolución, de fecha 7 de junio de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia, sobre vacaciones y otra del Consejo General del Poder Judicial.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los interesados a cuyo favor hubieren derivado derechos por la Resolución impugnada para que puedan comparecer y personarse en los autos indicados ante la referida Sala en el plazo de diez días conforme con lo dispuesto en los artículos 14 y 24.1 de la Constitución de 1978.

Lo que así acuerda y firma, en Sevilla, 2 de febrero de 1999.- El Director General, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2776/98, Sección 1.^a, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, don José Calle Peña ha interpuesto recurso contencioso-administrativo núm. 2776/98 contra la Resolución, de fecha 23 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se acuerda denegar abono de diferencias salariales por no disfrutar de las vacaciones al cesar como interino por incorporación del titular.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los interesados a cuyo favor hubieren derivado derechos por la Resolución impugnada para que puedan comparecer y personarse en los autos indicados ante la referida Sala en el plazo de diez días conforme con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que así acuerda y firma, en Sevilla, 4 de febrero de 1999.- El Director General, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2202/98-3.^a y se emplaza a los interesados para que puedan comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 2202/98-3.^a, interpuesto por doña María José Osorio García, contra la Orden de 26 de marzo de 1998, por la que se convoca concurso de acceso a la condición de personal laboral de carácter indefinido de la Administración de la Junta de Andalucía en las categorías pertenecientes al Grupo I,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 2202/98-3.^a

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los interesados para que puedan comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- El Director General, Vicente Vígil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2203/98-3.^a y se emplaza a los interesados para que puedan comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 2203/98-3.^a, interpuesto por don Rafael Cáliz Aguilera, don Antonio Guerrero Serrano, don José María Rosa Chamorro y don Abel Gallego Peralta, contra la Orden de 20 de marzo de 1998, por la que se integra a los funcionarios que se relacionan en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 2203/98-3.^a

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los interesados para que puedan comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- El Director General, Vicente Vígil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la Dirección General de Tesorería y Política Financiera, por la que se hace público el resultado de las subastas de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 9 de febrero de 1999.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de